



RESOLUCIÓN No. 625

MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintidós de julio de dos mil dieciséis.

Visto el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución número **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE**, emitida por este Ministerio a las ocho horas del día veinte de agosto de dos mil quince, por el Licenciado **LIZANDRO HUMBERTO QUINTANILLA NAVARRO** en su calidad de Apoderado General Judicial y Especial de la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**, Sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la ciudad de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña, autorizada para ejercer el comercio en El Salvador, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED];

[REDACTED] y continuado por el Licenciado **RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ TOLEDO** en su calidad de Apoderado General Judicial de la precitada Sociedad, en sustitución del Licenciado Quintanilla Navarro.

CONSIDERANDO:

- I. Que por medio de la Resolución número **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE** del día veinte de agosto de dos mil quince, se sancionó a la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.** con una multa de **MIL CIENTOS SALARIOS MINIMOS** equivalentes a **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, por no cumplir con lo establecido en el artículo 13 letra d), y 18 inciso tercero letra c) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo;
- II. Que en escrito presentado el día veintidós de abril de este año, por el Licenciado **QUINTANILLA NAVARRO** en su calidad mencionada, recurre de la referida Resolución señalando lo siguiente: Que reitera los argumentos centrales que manifestó oportunamente en su escrito de defensa, sobre la forma en que se interpreta la adecuación o proceso de subsunción de los hechos que le imputan a su representada, desde el enfoque del Principio de Legalidad, por el cual la sanción debe ser antecedida de un debido proceso legal, en el que se respeten los criterios legales para hacer juicio de la tipicidad de los hechos y de defensa, citando que los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, al momento de realizar la inspección en las instalaciones de sus representada, no se identificaron en legal forma y consignaron en el Acta que no se les permitió la entrada a las mismas, pero fueron ellos los

que no quisieron esperar mientras que el personal de seguridad cumplía con el protocolo o normas de conducta a observar ante la presencia de sujetos que no tienen ningún distintivo gubernamental, por lo que reitera que los hechos plasmados en el Acta de inspección no son ciertos ya que su mandante nunca negó el ingreso de los delegados a sus instalaciones, por lo que lo han interpretado que no ingresar de forma inmediatísima es infringir la ley en referencia, lo que es una exagerada discrecionalidad, asimismo reitera que la referida inspección se realiza en horas ya no hábiles y en las que el personal de la Planta está ausente, en consecuencia el personal de seguridad no es el idóneo para atender a los delegados cuando pretenden hacer las inspecciones.

- III. Que en escrito presentado el día veinticuatro de junio de este año, por el Licenciado **RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ TOLEDO**, manifestó que comparece en las presentes diligencias en su calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, en sustitución del Licenciado Lizandro Humberto Quintanilla Navarro, ratificando todos los argumentos sobre la base de los cuales se interpuso el presente Recurso de Revisión en contra de la Resolución número **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE**, solicitando se deje sin efecto la multa impuesta a su poderdante, y citando jurisprudencia sobre la desproporcionalidad de la norma que fija el monto de la multa, por lo que pide se le tenga por parte en carácter que comparece.
- IV. Que por las razones antes expuestas, se realizó una revisión del proceso sancionador, verificándose lo siguiente: 1) Que atendiendo a los principios de legalidad y tipicidad alegados, es necesario hacer referencia a ambos conceptos jurídicos por lo que se cita la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con Referencia 333-C-2004, que dice: *"La tipificación -tipo normativo-de la infracción constituye la descripción literal que hace el legislador de forma genérica sobre la prohibición de determinadas conductas, y su posterior sanción como consecuencia. Dicha descripción, a pesar de no tener un destinatario concreto-de ahí lo genérico-, incorpora elementos específicos perfectamente constatables por el aplicador de la ley. Entre ellos se encuentran la acción u omisión como conducta específicamente regulada, los sujetos activo y pasivo de la infracción, y el bien jurídico tutelado."* Es de señalar que la misma Sala en Resolución con referencia 189-M-2000, ha expresado que: *"La exigencia de la tipicidad encuentra su asidero constitucional en los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esta Sala ha resuelto anteriormente que esta exigencia se traduce en que para la imposición de una sanción administrativa se requiere la necesaria existencia de una norma previa en la que se describa de manera clara, precisa e inequívoca la conducta objeto de sanción. De tal manera, la aplicación de sanciones no es una potestad discrecional de la Administración, sino una debida aplicación de las normas*

pertinentes que exige certeza respecto a los hechos sancionados. En otras palabras, no podrá haber sanción si la conducta atribuida al sujeto no puede ser subsumida en la infracción contenida en la norma." En este orden de ideas es apropiado señalar que la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, en su artículo 4 determina que la vigilancia será ejercida a través de delegados, quienes previa identificación tendrán libre acceso, así como facilidades para hacer las inspecciones encomendadas, el resultado de dichas actuaciones se asentarán por medio de un Acta en donde se hará constar lo acontecido en la inspección, y en el artículo 13 letra d) de la misma Ley, señala como una obligación que las personas que se dediquen a actividades relacionadas con el petróleo, permitan y faciliten de manera inmediata a los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas efectuar inspecciones en cualquiera de sus instalaciones de los productos que comercialicen (el subrayado es mío); en consecuencia, impedir que se realice una inspección se convierte en una infracción grave, establecida en el artículo 18 letra c) de la precitada Ley, en cuyo contexto se reitera que la conducta mostrada por la Sociedad recurrente y que consta en el Acta que origina el respectivo proceso sancionador, está apegado a la conducta que la misma Ley considera como prohibida y sancionable, y en este sentido es apropiado establecer que a la Sociedad recurrente se le han respetado sus derechos de Audiencia y Defensa, tal como consta en el expediente administrativo en el que se observa que oportunamente se le concedió todas las garantías inherentes al debido proceso. En cuanto a las razones expuestas en relación a que las inspecciones se realizaron en horas ya no hábiles para la Sociedad recurrente, es pertinente mencionar que las actuaciones de este Ministerio a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, está bajo los lineamientos legales establecidos en la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y al Código Procesal Penal en su artículo 20, que dice: *"Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, salvo los de las diligencias iniciales de investigación y los de instrucción. Para continuar las audiencias sin dilaciones perjudiciales, por el Juez o Tribunal habilitará los días y horas que estime necesario"*; la regla general de los actos procesales dispone que la realización de éstos habrá de tener lugar en un periodo de tiempo determinado que se define por ser hábil para las actuaciones procesales, es decir, un tiempo establecido por el normal funcionamiento de juzgados o tribunales sometidos, como es lógico a un horario predeterminado; no obstante también establece una salvedad al criterio general antes expresado, cual es que el mismo no regirá para los actos consistentes en diligencias iniciales de investigación o de instrucción, la "ratio legis" de esta salvedad o excepción, radica en el hecho de que la actividad delictiva se produce en todo tiempo y que por ello, la respuesta investigadora o instructora debe de llevarse a cabo en cualquier momento y sin limitación temporal alguna más allá del criterio de quien investigue o instruya. Además, la ley también prevé la posibilidad que por decisión judicial se habiliten días y horas en principio inhábiles en

hábiles y por consiguiente sean eficaces los actos realizados. En este orden de ideas, y a efecto de darle cumplimiento a la función de vigilancia establecida en la Ley de la materia y con el propósito de garantizar al consumidor que los productos de petróleo se expendan en la calidad especificada y en la cantidad exacta determinada en los diferentes instrumentos legales, la citada Dirección consideró pertinente y habilitó que las inspecciones se realizaran en días y horas no hábiles de acuerdo a las necesidades que la misma Dirección establezca, lo cual consta en el Acuerdo número 951 de fecha 24 de octubre de 2008, emitido por este Ministerio, reiterándose así que la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, establece que los sujetos regulados por el citado cuerpo normativo deberán permitir y facilitar de manera inmediata el acceso de los delegados en sus instalaciones, para que éstos realicen las diligencias pertinentes, y al ser una obligación relacionada con la actividad económica que realiza la Sociedad, ésta debe de considerar como parte de sus operaciones diarias, que los delegados efectúen inspecciones de manera periódica, debiendo hacer del conocimiento de su personal tal situación, por lo que las actuaciones de los delegados están apegadas a derecho, y los hechos plasmados en el Acta levantada tienen plena validez jurídica, así lo ha establecido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución número 31/V/2000 correspondiente al Proceso de Amparo 349-99- en la que se dice: "*... lo dicho en ella, esto es, los conceptos que se vierten en la misma, gozarán de una presunción de veracidad para las partes y terceros mientras no se pruebe lo contrario. Esto es así, en virtud de la seguridad jurídica que debe concurrir en cada proveído jurisdiccional; y es que de no dársele la fe que se le otorga quedarían de manera arbitraria e indistinta para las partes -cuando así les parezca- la posibilidad de impugnar y tornar incierta cada actividad que en este sentido realice un tribunal, lo que ocasionaría indirectamente iniquidad e inseguridad latente y alterna en la búsqueda de la justicia...*"; no obstante lo anterior, la presunción de veracidad o falsedad de la que gozan admite prueba en contrario (Sentencia 22-2008), en cuyo contexto el referido Apoderado no ha desvirtuado lo consignado en el Acta en la cual está plasmada la infracción de su representada. En relación a la argumentación por parte del Apoderado referida a la inconstitucionalidad de la sanción impuesta a su mandante, es pertinente establecer que la Sentencia 175-2013 emitida por la precitada Sala, dice "*...en aras de la seguridad jurídica, la presente decisión no afectará en modo alguno las sanciones que de forma previa a la misma hubieren sido impuesta a sujetos infractores por parte titular del Ministerio de Economía de conformidad con la competencia que le otorga el Art. 19 de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, en relación a las infracciones menos graves, graves y muy graves establecidas en el Art. 18 de esa misma ley.*"; en este sentido, la aplicabilidad de la citada Sentencia es clara y no afecta de modo alguno las sanciones que fueren impuestas bajo dicha normativa.

- V. Que en el desarrollo de la Resolución recurrida, se verifica que la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**, incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 13 letras d) y 18 inciso tercero letra c) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. Es así que se considera que el proceso administrativo en comento se efectuó apegado a derecho.



POR TANTO:

De acuerdo a las consideraciones anteriores, razones expuestas, disposiciones legales citadas, teniendo como fundamento lo establecido en los artículos 1 y 11 de la Constitución; 9-B, 13 letras d) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y 1, 3, 212, 215, 216, 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Ministerio,

RESUELVE:

- 1) **NO HA LUGAR** el Recurso de Revisión interpuesto por el Licenciado **LIZANDRO HUMBERTO QUINTANILLA NAVARRO** en su calidad de Apoderado General Judicial y Especial y continuado por el Licenciado **RAFAEL EDUARDO GONZALEZ TOLEDO**, en su calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**
- 2) **RATIFÍQUESE** en todo su contenido, la Resolución número **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE**, pronunciada por este Ministerio, en esta ciudad, a las ocho horas del día veinte de agosto de dos mil quince.

NOTIFÍQUESE.



THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GÚZMAN
MINISTRO

